

NOMENCLATURA □□: 1. [40]Sentencia
JUZGADO □□□: 20° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL □□: C-1115-2019
CARATULADO □□: MARGUIROTT IBACACHE ENRIQUE REINALDO /
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS.

A folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado y don Francisco Javier Ugás Tapia, abogado, domiciliados en pasaje Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1104, Santiago, en representación de don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, chileno, casado, pensionado, domiciliado en avenida José Pedro Alessandri N° 1.923, casa 11, comuna de Ñuñoa, quienes viene en deducir demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por el residente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, en virtud de los hechos y el derecho que expone en su demanda.

A folio 6, consta la notificación personal del demandado.

A folio 7, se contestó la demanda.

A folio 10, se evacuó la réplica de la parte demandante.

A folio 12, se evacuó la dúplica de la parte demandada.

Atendido lo dispuesto en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil y siendo la presente causa de aquellas que se tramitan de acuerdo al Título XVI del Libro III del cuerpo legal en cuestión, se omitió el trámite de la conciliación.

A folio 18, se recibió la causa a prueba, modificándose por el auto de folio 31 y fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que rolan en autos.

A folio 67, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO.

PRIMERO. Que, la parte demandante expone que su representado, don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, es víctima de violaciones a sus derechos humanos, según lo estableció la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en su Informe evacuado en el año 2004, figurando bajo el numeral 14.076 del listado de víctimas de prisión política y tortura reconocidas por dicha comisión de verdad.

Indica que sobre los hechos represivos que afectaron a don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, el demandante ha proporcionado el siguiente relato:

“El día 11 de septiembre de 1973, a raíz del golpe militar, el Sindicato Industrial (obreros) de KORES CHILENA se paró e hizo salir de la fábrica a los simpatizantes de la derecha política, casi todos empleados de las oficinas. A mi



calidad de empleado particular, agregaba ser Delegado del Personal de Empleados, a pesar de ser simpatizante del gobierno de Allende. Los empleados, en su mayoría descendientes de extranjeros, me eligieron para defenderlos de los “rojos”. Ese día me quedé en la fábrica, con los obreros, esperando instrucciones y equipamiento del gobierno legalmente establecido. Cosa que nunca sucedió.

Estuvimos dos días encerrados en la fábrica. De cuando en cuando, pasaban patrullas de uniformados y/o de civiles mostrando armas largas y gritando que nos fuéramos.

En la madrugada del 14 de septiembre de 1973, vecinos nos anunciaron por teléfono que se acercaban tanques hacia la fábrica (única tomada al momento en el sector), por lo que huimos por detrás, hacia Quilín con Exequiel Fernández, donde hoy funcionan bodegas de Cardoen. Los uniformados entraron violentamente a la fábrica, derribando puertas, cortina y cierres, destruyendo maquinaria, materias primas e instalaciones. No había nadie.

En el tiempo anterior, yo asistía regularmente a reuniones del Cordón Macul, en representación de don LUIS RUBEN COLLAO, Presidente del Sindicato KORES, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, y dirigente del Movimiento Obrero de Acción Católica, MOAC. Quizás por ello fui incluido en listas llamadas por radio, para presentarme ante las nuevas autoridades, por lo que me salí de la casa de mi madre, lugar donde vivía, la que fue allanada en tres ocasiones.

Días después y sin tener donde ir, me presenté en la fábrica siendo detenido por una patrulla de Carabineros, al llamado del gerente de esta llamado JORGE MEYER SCHADLER. Los integrantes de la patrulla me propinaron golpes de pies, puños y culatazos, y en esa forma me arrastraron hacia el bus policial.

Luego, fui llevado la escuela de suboficiales de Carabineros de Chile, ubicada en la calle Rodrigo de Araya, donde yo y otros detenidos fuimos víctimas de simulacros de fusilamientos por parte de los agentes captores, quienes alternaban tal práctica con palizas. También, se nos incitaba a correr hacia el portón de entrada, momento en que había que lanzarse al suelo ante la inminente aplicación de la Ley de Fuga, muy popular en esos días.

Al segundo día de cautiverio, nos subieron en grupo a un microbús, poniéndonos como escudos humanos en las ventanas, pasando un fusil sobre el hombro, apuntando hacia afuera. Pasando frente a la fábrica SUMAR, en la antigua calle San Joaquín, subieron otras personas que se encontraban detenidas por otros agentes del Estado. A todos, nos lanzaron al piso del microbús, mientras los uniformados cantaban la canción “Venceremos”, saltando sobre nosotros.



Seguidamente, llegamos de noche al Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, y fuimos arrinconados en un sector frente a los camarines del estadio, en donde el piso era de tierra, siendo apuntados con fusiles por niños uniformados, quienes parecían tener entre 15 y 18 años de edad. Estos, habían sido traídos desde el norte del país como voluntarios y se encontraban más asustados que nosotros. Nadie se atrevía a toser y menos a estornudar.

Estuvimos a pan y agua durante esos días. Posteriormente, algunos días después, nos pasaron a algunos a los camarines, mientras la mayoría fue llevado hacia las galerías, las que ya tenían a miles de detenidos. Ahí quedamos quienes fuimos calificados como “peligrosos”, reales o supuestos, entre ellos, algunos artistas populares, párrocos, trabajadores, pobladores y estudiantes, muchos de los cuales se encontraban detenidos por delación de vecinos, compañeros de trabajo o dueños de empresas y negocios, respaldadas estas denuncias por presuntas maquiavélicas intenciones nuestras, en que ellos serían masacrados por el Plan Z. Una noche, a fines de septiembre de 1973, llegó un hombre, o lo que quedaba de él, con sus huesos rotos, ensangrentado y semi inconsciente. Vestía una pijama y estaba descalzo. Lo colocamos en la tina de baño del camarín, pero a la hora vinieron a buscarlo. “Recen por él”, nos dijo un soldado de unos 50 años y carácter bonachón, mientras lo arrastraban dejando una huella de agua con sangre. El detenido era el “Guate’pichi”, un delincuente de la Legua, quien poco antes del 11 de septiembre de 1973 había asaltado la Comisaría de Carabineros de Chile de San Joaquín y rescató, a punta de pistola, a su hermano, quien se encontraba detenido en ese lugar. Días después, la prensa publicó en primera plana que había asaltado y masacrado a tripulantes y heridos de una ambulancia, por lo que fue fusilado.

Las sesiones de humillación, malos tratos y tortura comenzaron el mismo día en que llegamos al estadio. Me llevaron dos veces a la torre del estadio, donde los interrogatorios eran personales y más rigurosos: aplicaban corriente en diversas partes del cuerpo, alternando esta con golpes, y la interrogante consabida, cual es, “¿dónde están las armas?”. También, fui llevado a la piscina del estadio, donde el asunto era más brutal ya que casi no preguntaban, solo nos pegaban, estando nosotros casi desnudos, solo cubiertos por una frazada. No veíamos nada y la cuestión era protegerse la cara y los genitales. Por las noches, pasaban tenebrosos encapuchados que apuntaban a algunos detenidos, los que eran retirados a culatazos y nunca más se volvería a saber de ellos. Un día pasó la Cruz Roja Internacional, y luego de sus entrevistas, fueron retirados, también con destino desconocido, la mayoría de los entrevistados. Una comisión falsa. A fines de año pasó la verdadera Cruz Roja Internacional y se notó: una semana antes



comenzaron a alimentarnos con porotos, cazuelas y otras viandas, que nos devolvieron el color a nuestra piel y algo de peso a nuestros magullados cuerpos. Dos situaciones especiales recuerdo vívidas de mi paso por ese recinto. La primera, ocurrió en una sesión de interrogatorio a la cual fui sometido, en la cual un teniente, al parecer muy joven, dada su voz, se jactaba ante los conscriptos (deducción también por la voz, ya que estaba cubierto por una manta) de ser estudiante de medicina y les explicaba que el corazón era tan potente como un grifo de agua. No le pareció nada mejor que explicarlo en forma práctica y tomó mi brazo derecho haciendo con su yatagán un corte en mi muñeca. Se le pasó la mano. Hasta él se asustó, pues el chorro de sangre respaldó sus comentarios. Luego, ordenó que me amarraran el brazo con unas tiras y me devolvieran al camarín, donde gracias a dos estudiantes de medicina, presos también, me salvaron la vida. La segunda, ocurrió cuando me trasladaron a la cárcel. Antes de salir, me sumergieron en la tina del camarín, y luego, me ordenaron salir, tomado de las manillas tipo piscina de esta. Cuando estaba en esa posición, el oficial a cargo me dijo sonriendo que si pensaba marcharme así de fácil. Seguidamente, sacó una pistola de su cinto y me apuntó a la cabeza, a no más de medio metro de distancia, recomendándome que si sabía rezar, rezara. Percutó el arma, sentí la explosión y un impacto en la frente. Mi cuerpo se estremeció por completo y me fui de espaldas. Creí morir, mientras a la distancia escuchaba risotadas. El arma estaba, al parecer, con bala de fogueo y las tomas de la tina estaban conectadas a la electricidad. Cuando disparó, conectaron la corriente, lo que me tiró de espaldas con el jolgorio de los presentes.

Por ese tiempo, el fiscal Joaquín Erlbaum me acusó de enfrentamiento armado con una patrulla de Carabineros de Chile, y me sometió a un Consejo de Guerra, siendo por ello trasladado en varias ocasiones a los subterráneos del Ministerio de Defensa Nacional, para ser sometido a sesiones de interrogatorio, las cuales tenían por objeto saber dónde estaban las armas y quiénes eran mis superiores, en la cadena de muertes que el Plan Z contemplaba. Ahí todos los agentes captores me pegaban: los que me llevaban, los que me recibieron y cualquiera que pasaba por el pasillo. La segunda vez que entré a la sala de interrogatorio, antes bien, me arrastraron a esta, fue con la cara ensangrentada y con gran dolor en las costillas y genitales. Ninguno de los oficiales que me interrogaron se preocupó de mi lastimosa situación.

Mis abogados de la Cruz Roja Internacional presentaron documentos oficiales, en los que constaba que los uniformados, a quien supuestamente atacué, llegaron desde Antofagasta alrededor de 20 días después de acaecidos los hechos que se me imputaban. Me dejaron libre, sin embargo, de inmediato fui trasladado a la



Cárcel Pública, acusado de redactar, imprimir y repartir propaganda contra el gobierno militar. El juez Sergio Dunlop Rudolffi me declaró reo por infringir la Ley N° 12.927, de Seguridad Interior del Estado, y el Decreto Ley N° 5, dictado el 12 de septiembre de 1973 y publicado el 22 del mismo mes y año, entrando en vigencia de inmediato. Este juzgador, posteriormente, dictaría sobreseimiento temporal y total en mi causa, por estar yo detenido durante todo ese período en que habrían ocurrido los hechos que se me imputaban.

Posteriormente quedé en libertad, más mis experiencias trágicas y represivas no se agotaron. Ello, porque en mis antecedentes legales se indicaba que era un individuo peligroso para la sociedad. Al inicio de esta travesía trabajé por cortos períodos en empresas de las que salía tan pronto algún “patriota” me delataba mi antigua condición política. Viajé al sur de Chile, en busca de empleo, y la cuestión fue la misma. Traté de exiliarme, pero los amigos desaparecieron, algunos literalmente, otros fugados, asilados en embajadas, escondidos o al buen resguardo de su entorno familiar. No se pudo. Finalmente, mi madre, a través de amistades, me consiguió un trabajo en una empresa extranjera, Corn Products Company.

Recién casado y con un hijo la situación de paria llegó a límites que romperían luego mi matrimonio.

Tiempo después ingresé a otra empresa extranjera, la que luego se fue del país, tras la devaluación del peso ante el dólar. Desde esa época la caída pareció no tener fondo.

Lo positivo fue que, en ese tiempo, ya estaba en la Universidad Técnica del Estado, en su modalidad vespertina. Finalmente, trabajé en la compra-venta de excedentes industriales por cuenta de terceros, negocio que fue derivando a fabricar productos plásticos (botones), perfumes de réplica y, finalmente, fabricar ropa de seguridad.

Otro problema que experimenté fue que tras la salida de mi último empleo, en 1983, ya no tuve servicio médico. Para todos los efectos era un indigente.

A principios del año 2000 comencé con dolores y sensaciones de que algo no andaba bien con mi salud. Psicológicamente tampoco estaba bien. Solo el hecho de haberme casado nuevamente mantuvo mi mente fuera de ideas suicidas.

A mediados de la década comenzaron problemas serios que padecí de próstata, los que el año 2009 me llevaron a quirófano, como última opción, por un cáncer muy avanzado.

El año 2012 otro cáncer me visitó, esta vez al riñón derecho, el que tuvo que ser cercenado parcialmente. El 2015, una metástasis de este último atacó mi pulmón izquierdo y, luego, se trasladó al derecho. Estando en tratamiento, el mal trepó el



2017 a mis huesos. Mi clavícula tuvo una quebradura espontánea y mi brazo izquierdo dos quebraduras más. Ahora, se alojó en el hígado. Esto se ha tratado como Enfermedad Catastrófica y no como GES, que no cubre el cáncer al riñón (pero que si cubrió el de próstata). Aún estoy con seguimiento y tratamiento de las metástasis. Una pequeña fortuna en medicamentos y exámenes que se llevó mis ahorros y que entre mis seis hijos están tratando de apalear. Un verdadero desastre familiar, por el valor de los medicamentos anticancerígenos requeridos. Hasta 1973 era una persona feliz, saludable y con expectativas. Después de ello, creo ser solo un sobreviviente, muy enfermo y con pocas esperanzas de una vida mejor, dado el alto costo de estos males que actualmente padezco, los que han requerido consumir, entre otros, anticancerígenos como el SUNITINIB y el INLYTA (Axitinib), con valores de MM\$ 3.3.- y MM\$ 4.8.-, parcialmente cubiertos por ser Enfermedad Catastrófica.

Las estadísticas del Programa de Atención Integral en Salud Mental, PRAIS, del Ministerio de Salud, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por mencionar dos, indican que casi el 90% de los enfermos o muertos de los detenidos, torturados y/o exonerados políticos, lo han sido por cáncer derivado esto por los malos tratos recibidos, sus estadías en prisión y los largos años de ser considerados parias de la sociedad, sin derecho a la salud, trabajo y otras necesidades básicas. Nuestras vidas han sido mutiladas por décadas”.

Terminado el relato, advierte que los efectos de los hechos criminales perpetrados en la persona de don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache perduran hasta el día de hoy y lo afectan gravemente. Él aún sufre por el daño que le ocasionaron agentes del Estado de Chile, producto de los hechos que le correspondió vivir en el período en que estuvo cautivo, durante la dictadura cívico-militar, los que marcaron de manera determinante su vida.

Respecto al derecho señala en primer lugar, que los hechos relatados se encuadran en un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra.

Explica, que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.



Sobre el tópico en cuestión, nuestra Judicatura se ha expresado, señalando la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago que “(...) resulta una exigencia previa determinar la fuente u origen de la acción impetrada por los actores [...] lo anterior tiene su fundamento en la existencia de un ilícito y las normas pertinentes, conducirán necesariamente a razonar acerca de la identidad y naturaleza del delito “contra la humanidad o de lesa humanidad”, tal como se ha calificado la infracción penal en cuestión por la doctrina penal nacional e internacional” (Cfr. ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 16.11.06, “Ruz y otro con Fisco de Chile”, Rol Ingreso N° 4.464-01, Considerando N° 2).

Asimismo, estos hechos constituyen crímenes de guerra. Ello, porque son graves violaciones a normas contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949, los que se encontraban vigentes en nuestro país, a la fecha de los hechos indagados en este proceso, ya que fueron publicados en el Diario Oficial de nuestro país, luego de haber sido aprobados por el Congreso Nacional y ratificados internacionalmente, los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 1951.

Añade, que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de septiembre de 1974, en virtud del Decreto Ley N° 3, en relación con el Decreto Ley N° 5, ambos de 1973, la Junta de Gobierno colocó a todo el territorio del Estado bajo estado de sitio, asimilándolo a un estado de guerra “para efectos de la penalidad y demás efectos legales” (sic). Como consecuencia de ello, comenzó a regir el Estatuto del Derecho Internacional Humanitario, contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en vigor en nuestro país, los que, en su artículo 3° común, regulan los conflictos armados de carácter no internacional. Es ese derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, el que tipifica y castiga estos crímenes, y el que obliga a los Estados a reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional, como lo son los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Chile es parte de los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos, de modo que se encuentra vinculado por las fuentes jurídicas que establecen este estatuto especial de responsabilidad estadual, por crímenes de derecho internacional.

Señala además, que es importante considerar que el 03 de diciembre de 1973, Chile concurrió con su voto a aprobar la Resolución N° 3.074 (XXVIII), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada “Principios de Cooperación Internacional para la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad”, la que expresa en su párrafo dispositivo 1° que: “Los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan



pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”.

Por su parte, el numerando 8º de la misma resolución, establece que: “Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones señalados por la Resolución ya referida se encuentran contenidos también en otras de la misma internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad”. Los fundamentos y criterios índole, pronunciadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Chile como país concurrente. Así, por ejemplo, existen las Resoluciones N° 2.391, de 02 de noviembre de 1968; Resolución N° 2.392, de 26 de noviembre de 1968; Resolución N° 2.583, de 15 de diciembre de 1969; Resolución N° 2.712, de 15 de diciembre de 1970; Resolución N° 2.840, de 18 de diciembre de 1971; y, Resolución N° 3.020, de 18 de diciembre de 1972, todas referidas a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, mediante las cuales los estados suscriptores -entre ellos, el nuestro asumen determinados compromisos internacionales que deben ser acatados y cumplidos de buena fe, en aplicación del principio pacta sunt servanda, y sin excepción posible.

En consecuencia, el Estado de Chile ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales que constituyen crímenes de derecho internacional, cometidos por sus agentes; enjuiciar y sancionar, si corresponde, a los culpables, y reparar a las víctimas y/o a sus familiares. Ninguna ley interna puede alzarse o desconocer esas obligaciones internacionales del Estado de Chile. Sea cual sea el parámetro que se utilice, resulta obvio, público y notorio que el crimen cometido en perjuicio de don Andrés Tadeo Galdámez Muñoz es un delito que, a la luz de la legislación internacional, tiene el carácter de crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, y como tal, debe considerarse, para los efectos de la acción de reparación, que reclama mediante la presente acción.

En segundo lugar y respecto a la Responsabilidad del Estado, señala que el artículo 38, inciso 2, de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

Menciona que la Excelentísima Corte Suprema ha sentenciado que: “la responsabilidad del Estado por actos de la administración [...] emana de la



naturaleza misma de esa actividad estatal, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas acciones que debe desarrollar en el ámbito de las funciones que les corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de los fines y deberes reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política, para lo cual debe hacer uso de todas las potestades y medios jurídicos y materiales que ella le otorga, lo que hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones, se sometan a normas y principios de la rama del derecho público”. (Cfr. E. Corte Suprema, 26.01.5, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol N° 3.354-03, Considerando N° 11.)

Sostiene que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos- son normas propias del ámbito del derecho público.

En el caso “Caro con Fisco”, señala que la Corte Suprema ha sentenciado: “que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se ha consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4 del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado.” (Cfr. E. Corte Suprema, 19.10.5, “Caro Silva con Fisco de Chile”, Rol N° 4004-2003, Considerando N° 6.)

Añade, por otra parte, en el caso “Albornoz con Ortiz y Fisco” se refuerza la misma idea, esto es: “que, tal como lo ha decidido anteriormente esta Corte, la responsabilidad del Estado por los daños que causen los órganos de su administración enunciada en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración, es de derecho público y de carácter genérico, por emanar de la naturaleza misma de su actividad en el ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo para los fines que le cometen la Constitución Política y las leyes, para lo cual debe hacer uso de las potestades, medios y acciones materiales conducentes a ellos.” (Cfr. E. Corte Suprema, 13.12.05, “Albornoz con Ortiz y Fisco de Chile”, Rol N° 4006-2003, Considerando n°19).

Luego, argumenta que para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan la presente demanda, resulta insoslayable remitirse al Capítulo I de la Constitución Política de la



República sobre las Bases de la Institucionalidad. Allí el constituyente desarrolla los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional. Así, el artículo que da inicio a nuestra Carta Primera en su inciso 4 prescribe que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”. En concordancia con lo anterior, el Art. 5 reafirma -en su inciso 2- que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. (Cfr: Cea, José Luís. Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Ediciones Universidad Católica de Chile. 2002. Pág. 210).

De este modo, las disposiciones reseñadas en conjunto con los Artículos 6 y 7 de la Constitución, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que como ha quedado en evidencia, emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Insiste a continuación, que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile forma parte, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (Art. 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal



obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Expone que todo lo anterior, esto es, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

De allí, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 17, IIDH, 1993. Pág. 25).

Se trata en consecuencia de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Así las cosas, expone que el Código Político reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través del artículo 5, inciso 2, que sanciona e incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. En igual sentido, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.



Respecto a la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional, señala que, como ha quedado de manifiesto, la resolución jurídica del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política de la República, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Por su parte, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños, contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al derecho internacional de los derechos humanos, constituyendo un error la aplicación de normas de derecho privado, a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos que constituyen crímenes de derecho internacional, como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, ya que ambos estatutos difieren en su naturaleza y fines, y están destinados a otras conductas e intereses. Al respecto, cobran relevancia los artículos 27 y 28, ambos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La diferencia entre uno y otro estatuto de responsabilidad es evidente. Por el momento basta con recordar que: “es claro que el perjuicio causado a un particular por otro o por el Estado en cuanto sujeto de relaciones privadas, es diverso al perjuicio que se le puede causar a un particular por una actuación ilícita y dañosa de un Estado con relación a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana.” (Cfr. Nash, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 2004. Pág. 23). Cita pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y añade que, se cumple con exponer ante esta judicatura un conjunto de razones de texto que nos llevan a sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana.

Tales razones son las siguientes: 1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, ya de entrada parece que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado -cuestión, por cierto, inimaginable en los tiempos de Andrés Bello- destinada a exterminar a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes



y, por lo mismo, ante un caso como éste -“secuestro calificado”- el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional; y, 2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (artículo.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (artículo 2321); edificios en ruinas (artículo 2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (artículos 2326 y 2327). Demás está decir que la regla del artículo 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuando han cometido crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra, más aún, es contraria al Derecho Internacional, pues permite la exculpación ante tan horrendos crímenes.

Respecto a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional, explica que la materia de que trata la presente causa, quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas-, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

En efecto, en toda sociedad democrática y respetuosa de la libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona -derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental- constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Por su parte, la citada Convención Americana -tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5 inciso 2, de la Constitución Política- señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Añade que, si bien es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez



la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se encuentra establecido en el Artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, al disponer que: “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: [...] c) los principios generales del Derecho reconocido por las naciones civilizadas”. [Tales] principios generales del Derecho [...] reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos. (Cfr. E. Corte Suprema, 14.10.2009, “López con Fisco de Chile”, Rol N° 5570-2007, voto disidente del Ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo, considerando N° 18.)

Al respecto, hace presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de La Haya desde los albores del Siglo XX- ha establecido que: “es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado “incluso una concepción general del derecho”, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, N° 7. Párr. 25-26).

Por lo anterior, resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano (del cual, Chile, por cierto, es parte) trae aparejada la obligación de reparar el mal causado. En esta materia la norma rectora es el Art. 63 del Pacto de San José. (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, 18.01.06, “Marfull González con Pinochet Ugarte”, Rol N° 37.483-2004, Considerando N°18.)

Por lo tanto, en Chile -dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano- la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derecho humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más



favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros. (Cfr. Nikken, P. “El concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, I.I.D.H., Costa Rica, 1994. pp. 15-17.)

Hace presente también, que sobre el citado artículo 63 de la Convención Americana, también se ha dicho que: “ese precepto acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. (...) la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (*restitutio in integrum*), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, el tribunal internacional debe determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños ocasionados. El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. Esta queda sujeta en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) al derecho internacional.” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Masacre plan de Sánchez”. Reparaciones. [Art. 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie N° 116. Párrs. 52-53).

Así también cabe mencionar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de *ius cogens*. (Cfr. E. Corte Suprema 13.12.2006, “Caso Molco”, Rol N° 559-2004. Considerando N° 19). En fin, vale reparar en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 144 publicado el 1o de Agosto de 2009, que en su Art. 75 (sobre reparaciones a las víctimas), establece que: “[...] La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”.

Prosigue que, en este mismo orden de ideas, nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por



tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, que establece los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales, al establecer que “[...] La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y, d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante”.

Concluye señalando que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble, constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible, en virtud del Principio IV de dicha resolución, según el cual “[...] Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional”.

Añade que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61º Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Allí se lee –en el Principio 23, sobre restricciones a la prescripción– que “La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las



acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación”.

En resumen: el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales.

Afirma que así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos declarando que: “[...] conforme se ha señalado en el presente veredicto, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delitos de “lesa humanidad”, calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción - por el transcurso del tiempo - de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.” (Cfr. E. Corte Suprema 21.01.2009, “Episodio Tormen”, Rol N° 3907-2007, Considerando N° 30).

Finaliza citando una serie de Jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, que ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil, cuando ésta emana de un crimen de lesa humanidad y/o de un crimen de guerra, en tanto crímenes de derecho internacional, lo cual denota un criterio jurisprudencial constante y consistente en la materia de nuestro supremo tribunal.

Respecto al daño provocado y al monto de la indemnización, señala que en este caso, existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que al demandante le ha tocado soportar como víctima de crímenes del derecho internacional.

Indica que por daño moral, se entiende aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.



A continuación hace un análisis de la conceptualización de daño moral en la doctrina chilena y la jurisprudencia

Añade que respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Del sentido común fluye que un familiar, es este caso, sus hijos, hijas y conviviente de una víctima de violaciones de sus derechos humanos, han sufrido un daño que debe ser reparado, en todas sus dimensiones.

Cita al efecto, sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema -de fecha el 8 de Noviembre de 1944, así como sentencia dictada en causa Rol Ingreso N° 5946-2009 y en caso más reciente, sentencia del 1 de diciembre de 2015. Rol Ingreso Corte Suprema N° 30598-2014.

Por último, refiere jurisprudencia constante y pacífica de la Excma. Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional.

Concluye señalando, que de todo lo expresado, es comprensible que un demandante experimente cierta dificultad al momento de proponer ante la Judicatura alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado. No obstante, los órganos encargados de la administración de Justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran. Por ello, su parte se permite pedir que se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total de \$200.000.000.- para don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, a título de indemnización por el daño que se ha causado, como consecuencia directa de los hechos criminales perpetrados en su contra por parte de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que se determine en justicia. Solicita además que las sumas, sean reajustadas de acuerdo a la variación del I.P.C., desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

Solicita en definitiva, tener por deducida la presente demanda, acogerla y condenar al Fisco de Chile al pago de la suma ascendente a \$200.000.000.- totales, por concepto de aquellos daños morales y en su integridad que ha padecido el demandante, con ocasión de los hechos criminales cometidos por agentes del Estado en su, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la



variación del Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa

SEGUNDO. Que, en su contestación, la demandada señala que el actor interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando sea condenado a pagar la suma total de \$200.000.000, más reajustes e intereses correspondientes y costas, como reparación por daño moral con motivo de haber sufrido detención ilegal, apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, cometidos desde el 14 de septiembre de 1973 en adelante por agentes del Estado.

Invoca como fundamento normativo los artículos 38 inc. 2º, 1 inciso 4º, 5 inciso 2º, 6, 7, 19 N° 1, 4, 24, y 26 de la Constitución Política de la República; art. 4 de la Ley 18.575; artículo 24 del Código Civil; art. 254 del Código de Procedimiento Civil; y diversos tratados internacionales sobre de derechos humanos, citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.

Respecto de las excepciones, defensas y alegaciones que se contraponen a la demanda, opone en primer lugar, la Excepción de Reparación Integral, por haber sido ya indemnizado el actor.

Explica que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis, se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Señala que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Refiere, respecto al segundo objetivo de la justicia transicional, referido al favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas para que prevenir que ocurran nuevas violaciones a los derechos humanos cometidas, indica que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie



de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban una “Pensión Única de Reparación Para los Familiares Directos de las Víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de Ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivó en la Ley 19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

El Ejecutivo, -siguiendo el referido Informe de la Comisión-, entendió por reparación, esto es: “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”.

Indica, en la discusión de la Ley N° 19.123 en diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. También se hizo referencia a los conceptos de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas; constituir una iniciativa legal de “Indemnización”; y hacer frente a la “responsabilidad extracontractual” del Estado.

Explica que en ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Refiere que por medio de estos tres tipos de reparaciones se concreta el proceso de justicia transicional y busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Respecto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.

Asegura que ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de:

- A) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig);
- B) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);



C) Bonos: la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; y

D) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

E) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000.-

En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Expone que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a pueda valorizarse para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Afirma que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Respecto a las reparaciones específicas, refiere que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Explica que la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más 13 años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, consigna que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

De esta forma, el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

Respecto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, agrega que como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de



diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país.

Expone que a nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad 16 desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892.- Este presupuesto se 18 distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Añade que se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Asimismo, se concedieron beneficios correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Respecto a las reparaciones simbólicas, señala que parte de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor - siempre discutible en sus virtudes compensatorias - sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas



víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Advierte que la doctrina, en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Cita a Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, en el sentido de tomar este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”.

Señala que en esta tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como las siguientes:

- a) ☐ La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;
- b) ☐ El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día nacional del detenido desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año, en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.
- c) ☐ La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, iconos, documentos o monumentos.
- d) ☐ El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.
- e) ☐ La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH, tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa



ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esa ciudad; y el “Memorial escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos, como consta del Informe adjunto del Ministerio del Interior, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Menciona que de todo lo expresado hasta ahora, puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar las víctimas de DD.HH. ha cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DD.HH.

Afirma que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo por ello, ser compensados nuevamente.

En este sentido, diversas sentencias han insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

Indica que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos desarrollada por Chile, a tal punto, que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas a los familiares más directos. Así, en el caso Almonacid, se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra párr. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares (cónyuge) y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$12.180,00 (doce mil



ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior - prosigue la sentencia - el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial...”.

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados

Cita a Lira, indicando que es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluye que, estando entonces las acciones de autos basadas en los mismos hecho y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es que opone



formalmente la excepción de reparación satisfactiva a la acción deducida en autos, por haber sido ya indemnizado el demandante.

A continuación, opone la Excepción de Prescripción Extintiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita ésta, se rechace la demanda en todas sus partes.

Indica que conforme al relato efectuado por la actora, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, ocurrió en septiembre de 1981.

Es del caso que, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 05 de febrero de 2019, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Hace referencia a generalidades sobre la prescripción, indicando que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

Sobre esta materia hace presente que la prescripción es una institución universal y de orden público.



Efectivamente, las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Insiste que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1, del Código Civil).

Afirma que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido.

Señala que fundamento de la prescripción, es dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Expone que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.



Añade, que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Agrega por otro lado no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

A continuación y haciendo referencia a jurisprudencia, cita la sentencia del pleno de la Excelentísima Corte Suprema de 21 de enero de 2013 (Rol 10.665-2011) y señala que como es de público conocimiento, la Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, dictó con fecha 21 de enero de 2013 sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En dicha sentencia, el Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1°) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2°) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción



indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia;

Añade que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo, no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su defensa, solicitando que se tenga en especial consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excelentísimo Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013, que acogió la aplicación de la institución de la prescripción, en materias como la de autos.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, indica que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, bastaría considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Finalmente y respecto a normas contenidas en el Derecho Internacional en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señala que su parte se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción



civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Explica que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excm. Corte Suprema que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N° 3074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

En relación a esta Convención destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, señala que el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.



Concluye en consecuencia, que el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Insiste que el planteamiento de la defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas.

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007, pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sres. Ricardo Gálvez, Adalis Oyarzún, el fiscal subrogante Sr. Carlos Meneses y los abogados integrantes Sres. Fernando Castro y Oscar Herrera.

En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema.

Señala que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Es por ello, que indica que con el mérito de lo expuesto precedentemente el Tribunal deberá rechazar la demanda por encontrarse prescritas la acción deducida.

En cuanto al daño e indemnización reclamada y en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, la defensa fiscal opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y el excesivo monto pretendido.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en



general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Indica que ha dicho la Excma. Corte Suprema: "Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcularla suma necesaria para borrarlo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido".

Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Advierte que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta absolutamente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.



Es más, añade, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en materia similar a la de autos que para fijar el quantum debe acudirse al Principio de Prudencia que 24 conduce a la proporcionalidad. Cita sentencia de segunda instancia dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891-2013, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

En subsidio de las excepciones opuestas de reparación y prescripción, señala que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte de Estado, conforme a las leyes de reparación (N° 19.123, N° 19.234 y N° 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente) y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también todos los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral.

Afirma que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hace presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia. Lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Además de lo alegado, añade que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Indica que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Por otra parte, el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resulta absurdo



pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Sostiene que respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, señala que tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Solicita en definitiva, tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

TERCERO. Que, evacuando la réplica, el demandante reitera todos los fundamentos de hecho y de derecho que expuso en su demanda, dándolos por reproducidos en su réplica y agrega:

Respecto a la excepción de “reparación satisfactiva o integral”, denominada también “excepción de pago”, alegada por la defensa fiscal y consistente en aplicar el modo de extinguir las obligaciones “excepción de pago” o de “reparación satisfactiva o integral”, en consideración a que el demandante ya ha sido indemnizado en virtud de la ley 19.123, que creó la “Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”, y fundamentalmente, por los beneficios pecuniarios percibidos al amparo de las leyes N° 19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones posteriores, le parece absolutamente errado. Señala que en el mejor de los casos, los montos que otorgan las referidas leyes sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Dichas pensiones en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por nuestra mandante en su calidad de víctima de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Con todo, añade, nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Conforme con ello es evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada. Indica que parece bastante razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la víctima directa que aquí represento. Por lo demás “los pagos” que realiza el Fisco de Chile



implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que además alega.

Advierte que, en su escrito de contestación, el Fisco de Chile vuelca su empeño argumentativo señalando que, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hace referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por los redactores del proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas se encuentra en diversos. También está presente en la discusión, la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y de reparación. En definitiva, explica que las diferentes leyes de reparación han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación (sic).

Expone que teniendo en consideración los argumentos vertidos en el párrafo anterior, la ley N° 19.123 en su artículo 2 establece que “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”. La palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de su mandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padecen hasta el día de hoy por las brutales torturas padecidas. Lo anterior, porque el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparada totalmente subsiste intacto e irreductible hasta el día de hoy.

Añade que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24 (“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”), entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión como ocurre en este caso concreto. En otras palabras, al no establecer la ley en comentario incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible resulta la excepción de reparación integral, o de pago, invocada por el Fisco.

Afirma que así también lo han entendido los tribunales superiores de Justicia en forma reiterada. No cabe entonces que el demandado con una interpretación bastante particular y cuestionable desde el punto de vista jurídico, trate de decir que en base a las leyes precitadas, las víctimas de violaciones a los derechos humanos estarían impedidas de demandar.



Ejemplifica lo anterior con lo sentenciado en la causa “Valencia Oyarzo Eliecer con Fisco de Chile, en que se condenó al Fisco a pagar la suma de \$150.000.000 a víctimas sobrevivientes del centro de detención y tortura ubicada en la Isla Dawson (Rol Corte Suprema 1092-2015). Además de los casos en que ha sido demandado el Fisco por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, y que este ha utilizado como defensa, la misma excepción de reparación integral aquí analizada, como por ejemplo en el de Carmelo Soria, cuyos familiares si obtuvieron una indemnización independiente de ser beneficiarios del Informe Rettig. Lo mismo ocurre con el caso del abogado Sr. Julio Cabezas, el caso de la familia de Tucapel Jiménez, a quienes el Consejo de Defensa del Estado indemnizó con una cuantiosa suma pese a recibir los familiares la misma pensión Rettig. Casos también como el de la familia del ex Canciller Orlando Letelier o el de la señora Otilia Vargas (madre de 5 desaparecidos), incluso el acuerdo arribado con la familia del General Carlos Prats, vienen a confirmar que es perfectamente compatible una indemnización en conjunto con la reparación del Informe Rettig. Si así no lo entendiéramos, el Consejo de Defensa del Estado estaría haciendo discriminaciones que no se condicen con lo expresado en nuestra Constitución o al menos se estaría contradiciendo en sus aseveraciones. Cita también a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el Caso Montes con Fisco de Chile, 10-07-2007, Considerando 7º; caso Carrasco con Fisco de Chile, 10-07-2007, Rol 6715-2002, Considerando 8º; Caso “Jara con Fisco de Chile”, 23-09-2009, Rol 2839-2008, considerando 10º y Caso “Vergara con Fisco de Chile”, 23-09-2009, Rol 2495-2008.

Añade que también la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, a desestimando las alegaciones del Estado de Chile, citando al efecto “Caso San Javier” Rol 4723-2007, considerando décimo cuarto.

Afirma que, nos encontramos con una norma rectora establecida en el artículo 76 de La Constitución Política de La República, bien conocida por todos; “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. En virtud de este artículo, el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la ley 19.123 y especialmente en la Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, para decir que el daño moral ya está reparado llevaría necesariamente a la conclusión



de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional.

Finalmente, afirma que si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir el Estado de Chile, y le estaría vedado a las víctimas discutirlo. Claro está, que un razonamiento así es contrario a cualquier principio básico del Derecho.

En segundo lugar y respecto a la Excepción de Prescripción Extintiva, advierte que es jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil.

Tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema.

Explica que en el caso "Caro con Fisco de Chile", la Corte Suprema da buena cuenta de ello: "Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se encuentra consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4° del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado" (Cfr. Excelentísima Corte Suprema, 19.10.05, "Caro Silva con Fisco de Chile", Rol N° 4004-2003, considerando N° 6).

En el mismo sentido, en el caso "Bustos con Fisco" el Máximo Tribunal ha dicho que: si bien el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, reconoce el principio de la responsabilidad del Estado, no indica cual es la naturaleza de ésta, de suerte que para determinarla debe necesariamente remitirse a la ley y, en este sentido, el artículo 4° de la Ley N° 18.575 previene en general, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado"



(Cfr. Excelentísima Corte Suprema, 26.01.05, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol N° 3354-2003, considerando N° 7.)

Hace presente que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”. Alegación, esta última, que resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

En este orden de ideas, explica que la doctrina de los actos propios consiste simplemente en castigar como “inadmisible toda pretensión contradictoria con comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión” (Cfr. Pardo De Carvallo, Inés. La doctrina de los Actos Propios. Revista de Derechos de la U. Católica de Valparaíso XIV, 1991-1992. P. 67). En tal sentido ha fallado uniformemente nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades. Así ha sentenciado: “Que al actuar de la forma que lo hicieron los ejecutados (...), es hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, importando un perjuicio en contra del acreedor, lo que no resulta aceptable, de acuerdo al principio acogido por este tribunal, por la doctrina, y que inspira además disposiciones como es la del artículo 1683 del Código Civil y otras de nuestra legislación, principio que recibe el nombre de teoría del acto propio. Se expresa en la forma latina *venire cum factum non valet*, lo que implica que no es lícito hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, y siempre que este cambio de conducta o comportamiento importe un perjuicio en contra de otro o sea contrario a la ley, las buenas costumbres o la buena fe” (Cfr. Corte Suprema. 20.04.2004. ROL N° 3097-2003. Considerando N° 4.)



Aun así, menciona que el demandado en su contestación de la demanda, insiste que el caso de autos estaría prescrito. Tal hecho no es así por varias razones:

- La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción. (Artículo 38° inciso 2° de la Constitución Política de la República).

- El demandado no (re) conoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos, como se verá más adelante.

Afirma que de acuerdo a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” es un error ignorar el hecho, que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Al respecto, basta tener a la vista el Art. 63 de la citada Convención junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo. En nuestro medio, añade, ya existen precedentes jurisprudenciales que refuerzan esta misma idea. De hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago ha sentenciado que “cabe precisar que la fuente de la responsabilidad civil, tratándose de una violación a los derechos humanos, está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos. En efecto, de acuerdo a los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando ha habido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. A juicio de la Corte Interamericana, el artículo 63.1 de la Convención constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales (...)” (Caso Aloeboetoe y otros de 1993). En un fallo reciente, aplicando este criterio señala: “Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de La Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación” (Caso Trujillo Oroza, de 2002. En el mismo sentido: caso Cantoral Benavides, de 2001; caso Cesti Hurtado, de 2001;



caso Villagrán Morales y otros, de 2001; caso Bámaca Velásquez, de 2002). En otras sentencias, la misma Corte ha manifestado: “Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general de derecho, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”. (Caso Velásquez Rodríguez, de 1989. En el mismo sentido, caso Godínez Cruz, de 1989. Asimismo La Corte cita fallos de otros tribunales en que se ha sostenido la misma doctrina, dictados los años 1927, 1928 y 1949). La Corte también ha aclarado que el artículo 63.1 de La Convención no remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de manera que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencia del derecho nacional, sino con independencia del mismo. (Caso Velásquez Rodríguez). De otra parte, se ha señalado que esta responsabilidad estatal surge sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, lo cual resulta lógico ya que indudablemente una violación de derechos humanos, por su naturaleza, supone dolo o al menos culpa estatal. En este sentido refiere el juez Cancado Trindade: “En mi entender, la responsabilidad internacional del Estado se compromete a partir del momento en que deja él de cumplir una obligación internacional, independientemente de la verificación de falla o culpa de su parte, y de la ocurrencia de un daño adicional. Más que una presunta actitud o falla psicológica de los agentes del poder público, lo que realmente es determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida diligencia para evitar violaciones de los derechos humanos). Se puede, así, ciertamente llegar a la configuración de la responsabilidad objetiva o absoluta del Estado a partir de la violación de sus obligaciones internacionales convencionales en materia de protección de los derechos humanos. Sobre dicha responsabilidad objetiva reposa el deber de prevención (Voto del Juez A. Cancado. Caso El Amparo)”. (Cfr. Corte de Apelaciones de Santiago. Caso Marfull. 18.01.06. ROL N° 37.483-2004. Considerando N° 18.)

Reitera que sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas. Al respecto, la Iltrma. Corte de Apelaciones ha sentenciado recientemente en relación a la imprescriptibilidad de la acción civil en delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado que: “la imprescriptibilidad señalada rige tanto para el ámbito de lo penal como de lo civil, puesto que carece de sentido, frente a la antedicha afirmación basada en el ius cogens, sostener la imprescriptibilidad para el primer ámbito y



desestimarla para el segundo, aduciendo para ello que éste es patrimonial, así como también el derecho a la indemnización reclamada, y por lo mismo privada y renunciable". Y luego, continúa señalando "Que la prescripción de la acción de que se trata no puede ser determinada a partir de las normas del derecho privado, que se refieren efectivamente a cuestiones patrimoniales, pues esas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos y del ius cogens, que importan obligaciones de respeto, de garantía y de promoción de esos derechos, así como la adopción de medidas para hacerlos efectivos". (Cfr. Corte de Apelaciones de Santiago, 11.05.07, Caso "Reyes Gallardo con Fisco de Chile", Rol N° 3505-2002. Considerandos N° 2 y N° 3).

Con todo, "Tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX" (Cfr. Corte De Apelaciones de Santiago, Caso "Carrasco con Fisco de Chile", 10.07.2007 , Rol 6715-2002).

Señala que, sin lugar a dudas, la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. En tal sentido, el profesor Carlos Ducci enseña que la interpretación estricta y/o restrictiva, que se funda en motivos lógicos o en el respeto a los derechos individuales, se aplica en primer término a las leyes penales, debiendo hacerse presente que la jurisprudencia ha dado el carácter de pena a las sanciones en general, más allá del campo estrictamente penal (Ducci, Carlos. Derecho Civil. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 4a Ed. 2005. p. 94). La evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos. En efecto, pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto



niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional. Más aún, luego del advenimiento de la 2a guerra mundial y la experiencia aciaga que significó el régimen nazi, surge fuertemente la necesidad de limitar el poder y arbitrariedad del Estado, modificando radicalmente la concepción de la soberanía estatal, limitando su ejercicio al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana dando vida al complejo normativo de los Derechos Humanos. De este modo, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código Civil reconoce en su artículo 4° al estipular que las disposiciones particulares “se aplicaran con preferencia a las de este Código”.

En consecuencia, agrega que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

Cita a mayor abundamiento otra sentencia de La Excelentísima Corte Suprema que acoge la imprescriptibilidad de la acción civil de fecha 08-04-2010 caso “Ortega con Fisco” Rol 2080-2008.

En tercer lugar, respecto al derecho aplicable, señala que cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la responsabilidad del estado, por hechos que causan daño y en que los particulares afectados no tienen



obligación jurídica de soportar tales daños. En un Estado de Derecho real - y no aparente - el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”. Añade, que el derecho citado por las partes no es vinculante para el juriscente. Este será el que soberanamente aplique el derecho al caso concreto. Ese derecho que se construye desde las normas constitucionales que conforman las bases de la institucionalidad hasta las legales. No olvidando las internacionales vinculantes para el Estado de Chile a propósito del inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política.

En cuarto lugar, respecto a la Jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, señala que respecto a la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia de la Excelentísima Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización.

Por último, en relación al monto de lo demandado y los reajustes, reitera que no hay dinero que supla el dolor experimentado el demandante, y es justamente el por qué en su petitorio se solicita que se condene en la suma que el Tribunal disponga.

CUARTO. Que, evacuando la dúplica, el demandado ratifica la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda, dándolas por expresamente reproducidas y conforme a ellas, solicita el rechazo de la demanda y agrega a continuación:

En relación a excepción de reparación integral, señala que el actor reconoce que la ley 19.992 estableció una pensión de reparación en favor de las víctimas de prisión y tortura. Sin embargo, señala que la defensa alegada sería improcedente, porque tal reparación otorgada por una ley especial no puede ser considerada como una indemnización de perjuicios para el actor porque tiene el carácter de “universal”. Agrega además que al demandante se le obligó a recibir dicha pensión.

Al respecto, en primer lugar reitera lo expuesto en la contestación de la demanda, precisando que tales prestaciones fueron claramente indemnizatorias del daño moral y constituyó un esfuerzo del Estado para dar solución y reparar el perjuicio. Insiste que la Ley N° 19.992 tuvo un fin reparatorio, ya que en caso contrario, no



tendría otra explicación o justificación el pago que se otorga a determinadas personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura. Dicho mecanismo indemnizatorio establecido por la ley, es sin duda, especial y trasunta un sistema que el Estado asumió voluntaria y directamente en favor de estas personas, para la reparación de daños morales.

Por lo anterior es excluyente de otras indemnizaciones, tanto porque sus beneficios son renunciables, como por cuanto la ley sólo la hace compatible con otras pensiones. Ello determina que la indemnización demandada sea improcedente, por ser incompatible con los beneficios ya otorgados por el Estado todo lo cual constituye una excepción de pago, y no solo una incompatibilidad.

En relación a las argumentaciones en cuanto a que el término reparar no implica indemnizar, no resultan argumentos sólidos, pues claramente al pagarse dinero, se les confirió una indemnización por la vía legal, la que fue aceptada por el actor.

Resulta evidente que cada persona tiene derecho a estimar que no ha sido suficientemente resarcida por el beneficio que la ley otorga, pero debe tenerse en consideración que el Estado en su conjunto hace un esfuerzo para otorgar no sólo una pensión, sino que además consagra otros beneficios sociales de salud y de apoyos técnicos y de rehabilitación para la superación de lesiones surgidas a consecuencia de la prisión política o la tortura. Asimismo, se concedieron beneficios educacionales, que si bien no están cuantificados, representan un importante costo para el Estado.

Advierte, que el demandante se encuentra en una situación especial por todos los beneficios compensatorios del daño moral como son el Programa de salud Prais, beneficios educacionales, etc y la pensión vitalicia que solo tiene como causa el reparar el daño moral sufrido y no es una pensión meramente asistencial, porque si bien existen las pensiones asistenciales, ellas tienen como fuente el cubrir otras necesidades sociales a las personas que se encuentran en estado de indigencia, situación totalmente distinta a la pensión otorgada al demandante.

Concluye que por ello que la indemnización demandada es improcedente, por haber sido ya pagada por el Estado de acuerdo a la ley 19.992 y obviamente resulta incompatible con los beneficios ya otorgados por el Estado, los que tuvieron un carácter claramente indemnizatorio del daño moral. Por ello no es pertinente la alegación del actor en el sentido que la indemnización sólo la puede determinar el tribunal. Ello no es así, nada obsta a que quien quiere reparar como el afectado por el hecho puedan convenir una reparación del daño moral, el primero, ofreciendo una suma o pensión vitalicia y el otro aceptando dicho ofrecimiento.



Respecto a la excepción de prescripción indica que la demandante no advierte la importancia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013, Sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”

Expone que el pleno de la Excma. Corte concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Añade que hace más de 10 años la Excma. Corte ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado; la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Insiste que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contiene normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Cita sentencia de casación en el fondo, de fecha 15 de mayo de 2002, dictada en la causa “Domic con Fisco”, ingreso CS. 4753-2001 y concluye que la discusión ha quedado definitivamente zanjada en el fallo del Pleno de la Excma. Corte a que se ha referido tanto en la contestación a la demanda como en los párrafos precedentes.

Por último señala que respecto de las otras alegaciones sostenidas en el escrito de réplica, se remite a todo lo expresado en el escrito de contestación a la demanda.

QUINTO. Que para acreditar sus dichos, la demandante acompañó en autos las siguientes probanzas:

Prueba Documental.

A folio 1, acompaña: a) Copia autorizada del mandato judicial otorgado el 17 de diciembre de 2018, por don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache a don Nelson Guillermo Caucoto Pereira y a don Francisco Javier Ugás Tapia, por escritura pública otorgada ante don Juan Salim Facuse Heresi, notario público de Santiago,



Titular de la Primera Notaría de Macul; b) Certificado de nacimiento de don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile; c) Copia simple de los documentos reunidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en el proceso de reconocimiento en su calidad de víctima de violaciones de sus derechos humanos a don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, todos ellos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; d) Copia simple de la portada y de la página 665, ambas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde consta el reconocimiento expreso, por parte del Estado de Chile, de la calidad de víctima de violaciones de sus derechos humanos de don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, específicamente, bajo el numeral 14.076; e) Copia simple de Informe psicológico relativo a don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, de 18 de mayo de 2018, suscrito por la psicóloga doña Natalia Hidalgo Leiva, y la asistente social doña Karla González Cáceres, ambas del Programa de Atención Integral en Salud Mental, P.R.A.I.S., del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, dependiente del Ministerio de Salud; f) Copia simple de Informe médico relativo a don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, de 22 de enero de 2018, suscrito por el doctor don Javier Quilodrán Peredo, cédula nacional de identidad N° 15.598.734-0, Médico de la Unidad Alivio del dolor y de Cuidado Paliativos de ONCOVIDA, red nacional de oncología; g) Copia simple de Certificado de Atención relativo a don Enrique Reinaldo Marguirott Ibacache, de 31 de mayo de 2018, suscrito por el psicólogo don Jonathan Javier Guzmán Quinche, cédula nacional de identidad N° 14.633.891-7, de la Unidad Alivio del dolor y de Cuidado Paliativos de ONCOVIDA, red nacional de oncología;

A folio 37, acompaña: Resolución que concedió la posesión efectiva de los bienes de don Enrique Marguirott a sus herederos

A folio 56, acompaña: a) Copia de la Sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, Rol N° de ingreso N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre del año 2015; b) Copia de la Sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018; c) Copia de la Sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018; d) Copia de Informe denominado “Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos”, de fecha 6 de diciembre del año 2010, suscrito por la directora ejecutiva Elena Gómez Castro, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS; e) Copia de Informe de Psicológico, de fecha 24 de mayo de 2020, suscrito por la Psicóloga Srta. Natalia Hidalgo Leiva y la asistente social Srta. Karla González Cáceres, evaluación que demuestra las



profundidades de las secuelas padecidas por el actor, don Enrique Marguirott Ibacache.

Prueba Testimonial.

A folio 64, consta la diligencia de prueba testimonial de la parte demandante, testigos que legalmente juramentados y sin tachas, declararon al tenor de los puntos de prueba fijados por resolución de fecha 23 de agosto de 2019, lo siguiente:

Comparece doña Roxana Trinidad Cienfuegos Cavieres, quien al punto de prueba número uno (1°.- Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios reclamados por la demandante.) señala que, más que todo, este es un tema de una persona que estaba mal psicológicamente, que fue víctima de muchos apremios ilegítimos, siempre en las reuniones sociales, cuando uno se toma unos traguitos y se comienza a conversar, Enrique recordaba y comentaba muchas cosas que él nunca los asumió, nunca pudo hacer una vida normal. Él sufría mucho con esto, a pesar de que hayan pasado muchos años, marcó su vida. La crueldad que tuvieron los Agentes del Estado con él, las cosas horrorosas que hicieron con él, entre ellas, le afectó su dignidad de hombre, de ser humano, fue víctima de violación en reiteradas oportunidades, y no fue solamente una persona, fueron varios. Y eso, lo marcó siempre, sus cambios de carácter, con mucha pena lo contaba, marcó su vida. Y eso también le afectó mucho físicamente, muchas enfermedades asociadas, problemas psicológicos serios, falta de sueño, gracias a Dios tenía una mujer que lo apoyaba mucho y lo contenía, y eso era fundamental, porque él psicológicamente estaba muy mal. Eso es lo que más comentaba él, en las conversaciones, Tenía muchos problemas con el sueño también, muchos desvelos. Era muy fuerte para los que lo escuchábamos, y él no podía disimular la pena que tenía, la angustia. Se sentía muy indigno.

Repreguntada para que aclare, hace cuánto tiempo conoce a don Enrique Marguirott, responde que es amiga de la señora, hace 30 años o más y más menos de esa fecha que lo conoce a él.

Repreguntada para que diga, si tomó conocimiento de las enfermedades que padecía el demandante, como refiere en su declaración, responde que sí, tomó conocimiento, en muchas oportunidades lo vio mal, con un cáncer que pudo superar, después vino otro, y después un tercero, el cual se ramificó. Él tenía mucha resistencia al dolor, su parte ósea estaba en varias partes muy deteriorada. Y sacando conclusiones, uno piensa que era por haber sufrido tanta tortura. Y aparte, la enfermedad psicológica, que le afectaba mucho la parte sueño, cambios de carácter, A veces él quería estar sólo.



SEXTO. Que, la parte demandada aportó en autos, las siguientes probanzas para acreditar sus alegaciones.

A folio 39, acompaña: Oficio N° 57792 de 1 de marzo de 2019 del Instituto de Previsión Social (IPS) que da cuenta de los beneficios percibidos por el demandante en el período 01-03-2005 al 28-02-2019 don Enrique Marguirott Ibacache.

SÉPTIMO. Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por la detención ilegal, tormentos y torturas sufridas por don Enrique Marguirott Ibacache, desde el 14 de septiembre de 1973 en adelante, por lo que resulta necesario determinar la existencia de dicha responsabilidad.

OCTAVO. Que, en atención a lo señalado por el documentos agregado a folio 1 y por la parte demandante, legalmente acompañados y no objetados por la contraria, en particular la copia del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, página 665, donde se señala a don Enrique Marguirott Ibacache, el bajo el numeral 14.076, calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, conocida como Comisión Valech I; Copia del Testimonio del demandante en Ficha de Ingreso de Preso Político y/o Torturado, autenticados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, carpeta N° 4442 en que se identifica al demandante; y además, atendido que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias, sino que ha centrado la controversia en primer lugar, si el demandante ha sido ya reparado en los perjuicios alegados o si la indemnización pretendida resulta incompatible con las reparaciones concedidas por las leyes 19.123 y 19.992, con sus modificaciones y otras normas pertinentes; y en segundo lugar, si la acción indemnizatoria deducida por el actor se encuentra prescrita extintivamente a la fecha de haber sido notificada al demandado.

NOVENO. Que, de los párrafos reseñados en el considerando anterior, podemos concluir como hechos no controvertidos en autos: a) la calidad de víctima de detención ilegal, exilio y tortura de don Enrique Marguirott Ibacache; y, b) que en la calidad antes señalada, aparecen en el Informe emitido por la Comisión Valech I, conforme al Decreto Supremo N° 1040/2003.

En consecuencia, se tendrá presente que la responsabilidad del Estado no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega expresamente, que el actor ha sido reparado satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en su contra durante la época de la dictadura.



Atendido a lo que se ha expresado en los párrafos anteriores, se tendrá por acreditado que la detención ilegal y tortura de don Enrique Marguirott Ibacache, ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley N° 19.123 y 19.992 y la Ley 20.874 al demandante.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.

DÉCIMO. Que, en primer lugar y respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea porque los hechos ocurrieron entre el desde el 14 de septiembre de 1973 en adelante, o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido con creces los plazos para ejercer la acción civil, se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los



derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que “*Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...*” y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994¹. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de *ius cogens*, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado “*Episodio Tejas Verdes*” de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014, denominado “*Episodio Nilda Peña Solari*” de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado “*Episodio Villa Grimaldi*”, caratulados “Ramón Martínez González”, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.

En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté

¹ Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, Artículo 3: “*Crímenes contra la humanidad. El Tribunal Internacional para Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un ataque generalizado y sistemático, y dirigidos contra cualquier población civil en razón de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso: a) Asesinato; b) Exterminación; c) Reducción a la servidumbre; d) Expulsión; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violaciones; h) Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos.*”



sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “*Episodio Nilda Peña Solari*” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “*Episodio Tejas Verdes*” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta

“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”.

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro



ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

Señala también la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, que dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, esta sentenciadora y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción civil que da origen a estos autos, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de un acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE REPARACIÓN SATISFACTIVA O DE PAGO.

UNDECIMO. Que, la parte demandada opuso también la excepción de ser improcedente la indemnización por la existencia de reparación satisfactiva obtenida por el demandante.

Al respecto, cabe tener presente que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno



ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.992 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, sin perjuicio, es pertinente señalar además, que la demandante, de conformidad a lo informado en el Oficio Ordinario DSGT N° 59583/2019 del 24 de junio de 2019, agregado a folio 11, el demandante no ha recibido beneficios de conformidad a la Ley N° 19.123.

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N° 19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las disposiciones de derecho internacional que conforman el *ius cogens* que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de



reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (*Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero*).

DUODÉCIMO. Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que el demandante sea beneficiario de un sistema de previsión de salud especial, de gestos simbólicos u otras medidas análogas, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales han sido víctimas directa o indirectamente.

Cabe hacer presente además, y como es de público conocimiento, que muchos de los “gestos simbólicos” como señala la demandada en su escrito de contestación han sido realizados, organizados y financiados por particulares y organizaciones no gubernamentales, en los cuales el Estado ha participado de manera tangencial o derechamente no lo ha hecho.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazara la excepción alegada de reparación satisfactiva, ya obtenidas por el demandante.

EN CUANTO AL FONDO.

DÉCIMO TERCERO. Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo establecida la responsabilidad civil el Estado, según se explicó en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N° 19.123 y N° 19.992 y las reparaciones simbólicas, según considerando décimo, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el considerando undécimo, corresponde analizar la procedencia de indemnizar al demandante por el daño moral con ocasión de su detención y torturas, cometida por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el actor, opuesta por la demandada.

En primer lugar, y en cuanto al daño moral, debe tenerse presente que este es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo,



causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado.

Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

DÉCIMO CUARTO. Que, lo descrito por el demandante en su libelo, en concordancia con que dichas circunstancias no fueron objetadas ni desacreditadas por la demandada, y el hecho que el actor se encuentra incorporado como víctima de prisión y torturas por la Comisión Valech I, habiéndose efectuado por este organismo un proceso investigativo y formado convicción de la calidad de víctimas de las personas incorporadas en dicho listado, ya bastan para tener por acreditado el daño moral sufrido por el demandante, presumiéndose con claridad la circunstancia de su detención, el tiempo que duró esta, la aplicación de reiteradas y terribles torturas, le causó un gravísimo pesar y dolor, los que razonablemente se profundizaron con el pasar del tiempo al unirlos a las graves perturbaciones que sufrió a lo largo de su vida, como fue el hecho de no poder encontrar un trabajo estable al mantener antecedentes en que se indicaba que era un individuo peligroso para la sociedad, y las posteriores secuelas físicas que derivaron de las torturas, como también las psicológicas. Dichos padecimiento se ven reafirmado por la declaración de la testigo aportada por la parte demandante, que con fecha 05 de enero de 2022, señaló que *“Él sufría mucho con esto, a pesar de que hayan pasado muchos años, marcó su vida”* y *“Tenía muchos problemas con el sueño también, muchos desvelos. Era muy fuerte para los que lo escuchábamos, y él no podía disimular la pena que tenía, la angustia. Se sentía muy indigno.”*

Se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley; así, la Ley N° 19.123 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se consideran causantes de los beneficios ahí establecidos, haciéndose extensivo a los familiares². Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema al

² Ley N° 19.123 Crea Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Establece Pensión de Reparación y otorga Otros Beneficios en favor de personas que señala (1992),

□“Artículo 2°.- Le corresponderá especialmente a la Corporación:1.- Promover **la reparación del daño moral** de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que



indicar que los citados cuerpos legales de manera explícita reconocen la existencia de los daños a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares.

Refuerza la idea anterior, el Informe denominado “Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos”, de fecha 6 de diciembre del año 2010, suscrito por la directora ejecutiva Elena Gómez Castro, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, agregado a folio 56, tampoco objetado por la contraria, todos referidos a las normas, descripción y evaluaciones técnicas sobre las consecuencias de salud física y mental sobre las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Dictadura Militar, las que concuerdan en que eventos de detención, prisión política y tortura provoca un profundo sufrimiento psíquico, caracterizado por una intensa angustia, sensación de pérdida permanente en el tiempo, frustración, desinterés en el mundo externo, familiar y laboral, pérdida de motivación, sentimientos de desamparo, vulnerabilidad y miedo de carácter persistente, ver a la estructuras estatales como organismos amenazantes, manifestaciones somáticas como dolores corporales crónicos, insomnio, lumbago, cefaleas, afectaciones transgeneracionales, es decir, extendiendo la traumatización a nuevas generaciones.

Si bien este informe es de carácter genérico, viene a reforzar el daño moral legalmente existente que las víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos han padecido.

Adicionalmente, el Informe Psicológico del demandante, elaborado por PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, de fecha 24 de mayo de 2018, concluye que las consecuencias de la situación vivida por el demandante posee secuelas a nivel psicológico, familiar, laboral y social. Añade que la gravedad de la enfermedad física que actualmente aqueja al actor, por su carácter traumático de la actualidad, reactiva el antiguo trauma secundario a la violencia política. Señala que debido a la intensidad y cronicidad de los síntomas y el prolongado periodo de vulneración e impunidad, hay aspectos del daño que son muy probablemente irreparables; el daño en el actor es significativo y el alcance de un eventual abordaje terapéutico estaría dando más en el poder administrar su trauma que superar huellas indelebles de una situación de tal magnitud.

En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado al demandante, en circunstancias

requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.

Artículo 18.- Serán causantes de la pensión de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.”



de su detención, prisión política y torturas, cometido por agentes del Estado en, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia.

DÉCIMO QUINTO. Que, la demandada ha alegado que la suma sobre la que se pretende obtener una indemnización, resultan excesivas, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas materias y los montos promedios fijadas por los tribunales de justicia. Además, subsidiariamente alegó que la regulación del daño moral, debe considerar todos los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Conforme al Oficio Ordinario DSGT N° 57792/2019 del 01 de marzo de 2019, agregado a folio 39, hace presente que don Enrique Marguirott Ibacache, recibe una pensión de reparación como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados de la Comisión Valech y fue beneficiario del Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874.

Que, en virtud de lo informado por el citado Oficio, en cuanto a que el actor es beneficiario de una pensión en virtud de la Ley 19.992, cabe señalar que ninguna de las disposiciones de la citada norma, establece la renuncia del derecho a reclamar una indemnización por daño moral.

Además, aun cuando pudiéramos estimar que la pensión vitalicia recibida viene a suplir parte del sufrimiento padecido por el demandante, el otorgamiento de dicha pensión se fundamenta en una norma de carácter general, estableciendo pensiones reparatorias para un universo de víctimas, no verificando la situación particular de cada individuo y por tanto, no podría estimarse que suple de forma razonable y suficiente la totalidad del daño.

En conclusión, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

Ahora, respecto al Aporte Único de Reparación recibido por la demandada en virtud a la Ley N° 20.874, establece en su artículo 1 inciso 3° que “Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”, por lo que habrá de considerarse el monto recibido por el demandante en este concepto, al momento de determinar las indemnizaciones pertinentes.

En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.992 y 20.874 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, correspondiendo



a pagos de distinta naturaleza que cumplen con un objetivo diverso y que además emanan de una fuente distinta.

Así, habiendo establecido que no existe una incompatibilidad entre los beneficios otorgados voluntariamente por el Estado y las acciones judiciales que puedan hacer valer en Tribunales, la alegación de la demandada de tener en consideración pagos efectuados a terceros, solo será considerada parcialmente, en atención a lo analizado en los párrafos anteriores.

Por último y en lo referente a tener en consideración los montos establecidos por otros tribunales, cabe recordar que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia, que el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente, no operando en nuestro país la doctrina del *stare decisis* (ya sea horizontal o vertical). Tanto es así, que lo más cercano a ello puede encontrarse únicamente el procedimiento laboral, en el que el legislador creó de forma extraordinaria el recurso de unificación de jurisprudencia, dando cuenta que ello constituye una excepción a la generalidad de nuestros procedimientos.

DÉCIMO SEXTO. Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el actor, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.

Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de ilícito, esto es detenciones ilegítimas y reiteradas torturas del demandante, sin poder desarrollarse normalmente en su entorno familiar, cultural, social y económico, el cual fue abruptamente truncado, tal como lo relata en su libelo y se ve reafirmado por la declaración de la testigo, detallada en el considerando quinto y el informe psicológico del demandante. Todo lo anterior con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima de autos.

Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan a las actoras en nada destierran el dolor y aflicción permanentes sufridos por estas, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado



quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos.

En consecuencia, encontrándose acreditada la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron en las detenciones y torturas del demandante, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento provocado.

En atención a lo expuesto se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor del demandante don Enrique Marguirott Ibacache, ascendente a la suma de \$120.000.000.- (cien millones de pesos).

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, la sumas ordenadas, se pagaran reajustadas de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto, se acogerá la excepción deducida por la demandada. Respecto a los intereses legales, estos se devengarán desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia y hasta la fecha de su pago efectivo, rechazándose la excepción opuesta respecto a su improcedencia.

DÉCIMO OCTAVO. Que, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenará a la demandada al pago de las costas.

Y, VISTO ADEMÁS lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123 y Ley N° 19.980; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**

I.- Que se RECHAZA la excepción de reparación satisfactiva o pago al actor.

II.-. Que se RECHAZA la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil.

III.- Que se RECHAZA la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil.



IV.- Que se RECHAZA la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

V.- Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y SE CONDENA a éste a pagar en favor del demandante don Enrique Marguirott Ibacache la suma de \$120.000.000.- .

VI.- Que la suma indicada, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde la misma fecha y hasta su pago efectivo.

VII.- Que se ACOGE la alegación de improcedencia de pago de reajustes en la forma solicitada.

VIII.- Que NO SE CONDENA en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

DESE COPIA A LAS PARTES, SIN COSTO ALGUNO PARA ELLAS.-

DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art.

162 del C.P.C. **en Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horariooficial.cl>